

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: JOHN JAIRÓ VÉLEZ PÉREZ
Demandado	: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Radicado	: 05001 31 05 004 2016 01222 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social, reliquidación pensión sanción en aplicación del Acuerdo Municipal 034 de 1970
Decisión	: Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
Sentencia No	: 099

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita la reliquidación de la pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 034 de 1970, avalado por la Convención Colectiva de Trabajo del Municipio de Medellín 1993-1994, teniendo en cuenta la asignación salarial para el cargo de Topógrafo, incluyendo prima de navidad, prima de vida cara, prima extra de junio, actualización de los valores, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación, condenas ultra y extra petita, costas del proceso.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma en términos generales, que fue contratado por el Municipio de Medellín el 21 de noviembre de 1977 y prestó servicios en diferentes cargos, hasta el 18 de mayo de 1993, cuando fue despedido sin justa causa; cumplió 55 años de edad el 15 de febrero de 2007 y contaba con 15 años de servicio, por lo que el día 10 de octubre de 2007, se hizo acreedor a una pensión de jubilación reconocida por el Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín –INVAL–; expone que para la presentación de la demanda, recibe la pensión reducida a menos del 65% con relación al valor real; cita el artículo 1º del Acuerdo 034 de 1970, según el cual, el Municipio de Medellín reconoció a favor de sus jubilados y pensionados, el reajuste automático de las pensiones, hasta alcanzar el 75% de la asignación fijada para el cargo que sirvieron de base para su reconocimiento, norma que debe aplicarse por resultarle más favorable. Sostiene que reclamó la reliquidación ante la demandada, siendo negada mediante Resoluciones No 1985 del 18 de septiembre de 2013, 027 del 23 de enero de 2014 y 087 del 22 de abril de 2014; refiere que en las otras administraciones, a más de 4.000 pensionados del Municipio de Medellín en las mismas condiciones del demandante, se les ha reconocido el derecho sin acudir a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, asistiéndole el derecho a obtener los reajustes pensionales conforme al Acuerdo 034 de 1970.

Respuesta a la demanda:

EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN aceptó lo referente a que el demandante laboró para el Instituto Metropolitano de Valorización -INVAL- y sus extremos, en calidad de trabajador oficial, así como, el contenido de los actos administrativos citados; explica que mediante Resolución No 0547 del 10 de octubre de 2007 se reconoció al demandante una pensión sanción consagrada en la Ley 171 de 1961, liquidada de manera proporcional al tiempo de servicio, sin que sea una pensión plena de jubilación que para el año 2017 asciende a la suma de \$1.166.063; reconoce que la entidad no está dando aplicación al Acuerdo 034 de 1970, por ser contrario a la Constitución Política, máxime que fue anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y si bien lo venía aplicando, no significa que deba continuar haciéndolo, por existir razones constitucionales y legales para no aplicarlo. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones denominadas de inconstitucionalidad, nulidad del Acuerdo 034 de 1970, prescripción, inexistencia del deber legal, falta de aporte legal, buena fe.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Cuarto Laboral** del Circuito de Medellín, declaró que el señor John Jairo Vélez Pérez no tiene derecho a la reliquidación de la pensión sanción, en aplicación del Decreto Municipal 034 de 1970 y **fabsolvió al Municipio de Medellín** de las pretensiones formuladas en su contra; impuso **Costas** a cargo del demandante, agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) SMLMV, a favor de la demandada.

No se interpusieron recursos.

Alegatos de conclusión:

Dentro del término legal, ninguna de las partes allegó alegatos de conclusión.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se conoce en el grado jurisdiccional de **Consulta** en favor del demandante, conforme a lo indicado en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si hay lugar a revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si el demandante tiene derecho a la reliquidación de la pensión sanción, en aplicación del Acuerdo Municipal 034 de 1970.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:

Pretende el demandante se condene al Municipio de Medellín, a reliquidar la pensión sanción de la cual es beneficiario, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 034 de 1970, teniendo en cuenta la asignación salarial para el cargo de Topógrafo, incluyendo prima de navidad, prima de vida cara, prima extra de junio, actualización de los valores, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación.

Al respecto, tenemos que conforme a lo señalado en el artículo 1º del citado Acuerdo, el Concejo Municipal de Medellín, dispuso lo siguiente:

“...Reajústese las Pensiones de Jubilación e Invalidez, reconocidas por el Municipio de Medellín, en la siguiente forma:

- a) Por todo el tiempo al servicio del Distrito, al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación actual del cargo o cargos que sirvieron de base para la liquidación de la Jubilación.*
- b) Cuando al pago de la Pensión concurren otras Entidades, el reajuste a que se contrae el numeral anterior, se hará sobre la cuota que corresponda al Municipio de Medellín.*

Cada vez que las asignaciones sean aumentadas, la respectiva Pensión de Jubilación e Invalidez, serán automáticamente reajustadas en las proporciones anotadas.

PARAGRAFO: Para los efectos de este artículo, cuando el cargo que sirvió de base para la liquidación de la Jubilación o Pensión de Invalidez haya desaparecido, haya sido suprimido, o no conserva su primitiva denominación, el equivalente, se determinado por el Comité de Organización y Evaluación de Oficios...” (folio 27).

El Juzgado de Primera Instancia absolvió a la entidad demandada, explicando que para el caso del señor Vélez Pérez, **no es procedente la aplicación de la norma invocada**, citando para ello decisiones judiciales de los Órganos de Cierre de las jurisdicciones Ordinaria en su especialidad Laboral y de lo Contencioso Administrativo, según las cuales, **el ente territorial excedió su competencia al expedir el Acuerdo Municipal citado**, ya que según lo tiene dispuesto la Constitución Política, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales han carecido de competencia, para fijar el régimen jurídico de las prestaciones sociales de sus servidores públicos, entendiendo que en esa prohibición se incluye la facultad de variar el porcentaje de la pensión de jubilación, por tratarse de elementos o factores esenciales de la prestación social. Además, la **norma invocada por el demandante fue declarada nula por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín.**

Al respecto, **encuentra esta Sala de Decisión Laboral** que deberá confirmarse la decisión absolutoria de Primera Instancia, porque tal como lo explicó el *a quo*, **la norma invocada por el demandante** para obtener la reliquidación de la pensión sanción que percibe, **esto es, el Acuerdo No 034 del 15 de diciembre de 1970, no hace parte de la normatividad colombiana, no es una norma vigente, fue expulsada del ordenamiento jurídico y por tanto, no surte ningún efecto.**

Lo anterior, por cuanto **el citado acto administrativo fue declarado nulo, mediante Sentencia proferida por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín, de fecha 27 de octubre de 2016** (folios 141 a 151), esto es, ocho (8) días después de haberse radicado esta demanda el 19 de octubre de 2016 (folio 15), antes de su admisión el 16 de febrero de 2017 (folio 107) y de la notificación a la demandada el 28 de marzo del mismo año (folio 108). Decisión contra la cual no se interpuso recurso de Apelación y quedó **ejecutoriada el día 15 de noviembre de 2016**, según el contenido de la Sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia el día 27 de abril de 2018, mediante la cual, se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por la Asociación de Pensionados del Municipio de Medellín, contra la Sentencia que declaró la nulidad del Acuerdo 034 de 1970¹.

En la Sentencia que declaró la nulidad, indicó el Juzgado² que el Concejo de Medellín, con la expedición del acto administrativo cuestionado, se apartó de los mandatos constitucionales, por cuanto carecía de facultades para regular el régimen prestacional de los servidores a cargo del Municipio de Medellín, abrogándose la facultad de modificar el régimen de prestaciones sociales, como las pensiones de jubilación e invalidez de los ex servidores de la entidad, siendo ello del resorte exclusivo del Órgano Legislativo y del Gobierno Nacional (folio 149).

De otro lado, se afirmó en el hecho 11 de esta demanda, que el actor solicitó a la entidad demandada el pago del reajuste pensional al que considera tiene derecho y que se le dejó de pagar sin razón alguna; aportó copia de la Resolución No 1985 del 4 de septiembre de 2013, mediante la cual el Municipio de Medellín resolvió no acceder a la petición de reajuste de la pensión según el Acuerdo 034 de 1970, explicando que si bien venía reconociendo el reajuste, a favor de quienes se habían pensionado hasta el 30 de junio de 1995, cuando entró en vigencia el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones para la entidad;

¹ Tomada de

<https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2b5kvLmnBBILAEzLDmsYjvSsxWC8%3d>

² Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín

realizó un nuevo estudio jurídico sobre la legalidad de la aplicación del citado Acuerdo, con fundamento en Sentencias de las Altas Cortes, con base en las cuales concluyó que, la fuente de derecho invocada para expedir el mencionado acto administrativo, era inexistente en aquella época y que la Corporación que lo expidió carecía de competencia para ello.

Respecto a lo anterior, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley 4ª de 1992³, según el cual, **todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la citada Ley** o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional al desarrollarla, **carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos**; por tanto, la entidad demandada actuó conforme al ordenamiento y al precedente judicial fijado sobre el tema, al negar la reliquidación solicitada por el señor Vélez Pérez.

Sobre los efectos en el tiempo de las Sentencias que declaran la nulidad de actos administrativos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante Concepto del 5 de junio de 2014, en Radicado 11001030600020130054400, **indicó que por regla general** la anulación de actos administrativos **tiene efectos ex tunc**, es decir, **desde el momento en que se profirió el acto anulado por la jurisdicción**, lo que implica predicar que el acto no existió ni produjo efectos jurídicos, por estar viciado desde su expedición; veamos:

“...Esta Corporación ha precisado en reiterados pronunciamientos que la nulidad de un acto administrativo declarada por la vía jurisdiccional implica el reconocimiento de que desde su expedición estaba viciado. Razón por la cual, la declaratoria de nulidad produce efectos ex tunc, es decir, que desaparece el velo de su aparente legalidad, desde el momento mismo de su emisión, lo que hace que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su expedición, no teniendo vocación de generar ningún efecto jurídico...” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de abril de 2009. Radicación número: 2007-00036.)

Así mismo, la **H. Corte Constitucional en Sentencia C-069 de 1995**, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 66 (parcial) del

³ Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo

Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) relacionada con la **pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos**, citó **Sentencia del H. Consejo de Estado, Sección Primera, del 1º de agosto de 1991**, donde el Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señaló que **la extinción de un acto jurídico se puede producir por circunstancias sobrevinientes, que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la existencia, como cuando se declara la nulidad del acto administrativo de carácter general, en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular**; en los siguientes términos:

*"...La doctrina foránea, y la nacional que ha seguido esas concepciones sin mayor profundidad, bueno es reconocerlo, al tratar las formas de extinción de los actos administrativos, generales o de efectos particulares, ha reconocido y consagrado la **figura jurídica del decaimiento del acto administrativo**, o sea, **la extinción de ese acto jurídico producida por circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la existencia del acto**: a) derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo; b) declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control de constitucionalidad, en los países donde ello existe; c) **declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular**; y d) desaparición de las circunstancias fácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento de un derecho o situación jurídica particular y concreta..."* (Negritas fuera de texto).

De donde se concluye que, en caso que al demandante se le hubiera reconocido en alguna época la reliquidación pretendida - de lo cual no hay prueba en el expediente-, ese acto administrativo quedó extinguido, al haberse declarado la nulidad del Acuerdo 034 de 1970, como fundamento de la decisión de contenido particular.

Conforme a todo lo anterior, no es procedente acceder a lo pretendido por el demandante, por cuanto la norma invocada para obtener la reliquidación de la pensión sanción de la cual es beneficiario, esto es, el Acuerdo Municipal 034 de 1970, fue declarado nulo por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el año 2016, decisión que se encuentra ejecutoriada y tiene efectos desde el

150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

momento en que se profirió el acto anulado, lo que implica que no existió, ni produjo efectos jurídicos, por estar viciado desde su expedición.

Así las cosas, se **confirmará** la decisión absolutoria de Primera Instancia.

COSTAS:

No se condenará en Costas en esta Segunda Instancia al haberse conocido en el grado jurisdiccional de Consulta, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se CONFIRMA la Sentencia de la fecha y procedencia conocidas, que se revisa en el grado jurisdiccional de **Consulta** en favor del demandante señor **JOHN JAIRO VÉLEZ PÉREZ**; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: No se CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia; según los considerandos.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9º del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

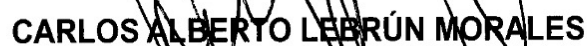
Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
Estados No. **69** del **26 de abril de 2021**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>